

CLUB SIGLO XXI

SEGUNDA LEGISLATURA DE ZAPATERO

(IX Legislatura de las Cortes Españolas: 1 de abril de 2008 / 13 de diciembre de 2011)

Lo primero que llama la atención en un vistazo general a los casi ocho años de Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero es la enorme diferencia entre la primera y la segunda legislaturas. Por dar un par de referencias muy simbólicas, como recuerda el profesor Ignacio Sánchez Cuenca en su ensayo “Años de cambios, años de crisis”, Zapatero empezó aclamado y advertido con el grito del “No nos falles” en la noche del 14 de marzo de 2008 y fue despedido por las movilizaciones de los indignados que proclamaban “Lo llaman democracia y no lo es”.

- La primera legislatura se estrenó con la retirada de las tropas de Irak y estuvo centrada en grandes debates políticos en torno a derechos civiles y sociales, el modelo territorial, la negociación con ETA y la memoria histórica. Podría decirse que durante ese primer periodo de Gobierno, Zapatero suscitó permanentes polémicas pero llevó casi siempre la iniciativa política. De hecho consiguió en las elecciones de 2008 aglutinar el voto entre los ciudadanos de izquierdas al polarizarse mucho las posiciones. La mayor crítica a Zapatero en esa fase fue la de abrir melones o problemas políticos sin tener bien perfilada la solución, creando incertidumbres que suscitaban tensión política, también alimentada permanentemente desde la derecha política y mediática.
- La segunda legislatura, sin embargo, estuvo absolutamente marcada por la crisis económica, que además se llevó por delante parte de los proyectos de calado social iniciados en la primera legislatura. Como primer elemento de contraste también hay que apuntar que en esa segunda legislatura Zapatero perdió la iniciativa y fue constantemente a remolque de los acontecimientos. Primero se resistió a reconocer públicamente la gravedad de la crisis, luego cometió el error de hacer predicciones optimistas

sistemáticamente desmentidas por la realidad y, por último, se dobló ante las presiones externas (Comisión Europea, BCE y Alemania) para adoptar un programa de recortes presupuestarios que contradecía la visión socialdemócrata de Zapatero y provocaba la decepción y la incompreensión de una buena parte del electorado socialista.

Partiendo de este resumen del contraste entre ambas legislaturas, podemos entrar con un poco más de detalle en los acontecimientos y políticas que marcaron la segunda etapa de Zapatero y llevaron al PSOE a la mayor derrota de su historia.

“ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDOS”

La segunda legislatura de Zapatero parte de un programa electoral centrado en cuestiones económicas y sociales y del que se ha eliminado la carga más ideológica que tuvieron temas como el Estatut, el proceso de paz o la memoria histórica. La apuesta se basaba en intentar sacar rédito a los buenos resultados económicos de la primera legislatura. No fueron esencialmente, en todo caso, mérito de los primeros Gobiernos de Zapatero sino más bien del prolongado ciclo expansivo de la economía desde mediados de los años noventa. Parámetros como la tasa de crecimiento, la inflación, la tasa de paro, la deuda pública o la productividad presentan una continuidad importante entre la etapa de Aznar y la primera de Zapatero.

Como todos sabemos, y hoy sufrimos, ese crecimiento que era la envidia del resto de Europa se basó sobre todo en el sector de la construcción, cuya expansión tampoco surgió por esporas, sino que fue alimentada por la política monetaria del Banco Central Europeo y por decisiones políticas como la Ley del Suelo de 1998 o por las desgravaciones fiscales por compra de Vivienda, mantenidas tanto por Aznar como por Zapatero. Éste abordó una timidísima reforma de esa Ley del Suelo en 2007, pero no sirvió (tampoco lo pretendía) para pinchar la burbuja inmobiliaria.

La continuidad en política económica se demuestra también en el hecho de que ni siquiera cumplió Zapatero la reforma fiscal prometida en el programa electoral de 2004, quizás porque no tenía muy clara la victoria y por tanto se mojó mucho más en el acento socialdemócrata o bien porque nadie es capaz de alterar un rumbo político-económico cuando se está en la cresta de la ola. Dicho de otro modo: aunque hubiera habido conciencia e intención de pinchar la burbuja y de abordar los defectos del modelo fiscal español no se quiso hacer como nadie se atreve a amargar una fiesta con una mala noticia si ésta se puede postergar.

Pues bien: partiendo de los buenos resultados de los grandes parámetros económicos, y especialmente del dato de paro de la primera mitad de 2007, cuando había bajado en junio al 8%, el PSOE y Zapatero decidieron ofrecer como gran argumento de la campaña electoral nada menos que la promesa de PLENO EMPLEO. Y aquí cometió Zapatero el primer gran error o irresponsabilidad política de la segunda legislatura.

Desde el verano de 2007 el paro había venido aumentando en España aunque fuera levemente, y en Estados Unidos se había producido el estallido de las hipotecas subprime. Es verdad que prácticamente nadie preveía en aquellos momentos la posibilidad de una recesión, menos aún de la magnitud que ahora conocemos, pero también es cierto que existían ya numerosos pronósticos que apuntaban a un empeoramiento de la situación económica internacional. Visto con perspectiva, pero también en aquellas mismas fechas ya se apuntó, resulta incomprensible que Zapatero cayera en el mismo error que el PSOE cometió 25 años antes, en 1982, cuando prometió crear 800.000 puestos de trabajo. Desde aquel patinazo todo el mundo sabe que cuantificar la creación de empleo es un dislate, porque depende (muy especial y desgraciadamente en España) de los ciclos de la economía. Hay que decir, por otra parte, que ese error u osadía no es un rasgo exclusivo de Zapatero. En la misma campaña de 2008, Rajoy adelantó que su objetivo sería también el pleno empleo con la creación de 2,2 millones de puestos de trabajo; incluso en la última campaña electoral, la de 2011, el PP calculó en 3,5 millones los

empleos que aspiraba a crear (lo hizo por boca de González Pons; Rajoy se conformó con fotografiarse para la portada de EL MUNDO en la cola de una oficina del INEM bajo el titular entrecomillado en el que él aparecía como la solución al paro).

De aquella campaña todos recordaremos el debate entre Pedro Solbes (con un ojo medio cerrado) y Manuel Pizarro, el gran fichaje de Rajoy para dirigir el equipo económico de su futuro Gobierno. Podría decirse que unos y otros lo apostaban todo a aquella máxima que hizo popular a principios de los noventa un asesor de Bill Clinton: “Es la economía, estúpidos”, cuando se trataba de llevar a alguien en volandas a la Casa Blanca, en este caso a la Moncloa. Había que convencer a los electores de que tu candidato era quien mejor podía resolver los problemas o garantizar la prosperidad.

Las elecciones se celebraron el 9 de marzo de 2008, y el PSOE ganó cinco escaños más que en 2004, a costa fundamentalmente de Izquierda Unida y de algunos grupos nacionalistas. La realidad de una situación económica bastante positiva pudo mucho más que las negras amenazas que trasladaban los dirigentes del PP; fue una cuestión de credibilidad y también una cuestión emocional. En política, como en otras facetas de la vida, la gente no suele apostar por el pesimismo o por los nubarrones, salvo que la realidad demuestre que el optimista no es que sea optimista sino un mentiroso. Que el talante de Zapatero es optimista por naturaleza no es ningún secreto, pero los datos (incluidos los que figuraban en el programa del Partido Popular) indican que a principios de 2008 no intentaba engañar a todos los ciudadanos sobre la situación económica, sino que simplemente no creía que se avecinara la mayor recesión de las últimas décadas. (Baste como ejemplo no sólo la coincidencia del PP en prometer el pleno empleo sino también el compromiso de Rajoy de crear 400.000 plazas de guarderías públicas, 100.000 más de las que ofrecía el PSOE). Las cuentas no salían para ninguno de los dos principales partidos si de verdad hubieran creído que la crisis que se acercaba era de la magnitud que ahora conocemos. De hecho, la crisis no fue prevista por ninguno de los organismos internacionales que ahora nos imponen las recetas para superar las consecuencias de esa crisis.

Por resumir en un solo enunciado lo que ocurrió con esa segunda legislatura política: la crisis se merendó a Zapatero y todo su programa electoral. Desde otoño de 2008, con la caída de Lehman Brothers, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la sequía absoluta de crédito, Zapatero fue una especie de zombie que iba reaccionando a los desastres que se iban produciendo con mayor o menor acierto, pero en cualquier caso a la defensiva, en busca del mal menor... con un perfil político no tan alejado en este sentido del que hoy puede definir a Mariano Rajoy.

LA IMPRONUNCIABLE PALABRA “CRISIS”

El propio Zapatero ha reconocido en más de una ocasión posteriormente que uno de sus mayores errores fue en aquellas fechas (primavera de 2008 y meses siguientes) negarse a pronunciar la palabra crisis. No se justifica esa actitud en la buena intención de no insuflar desde el Gobierno aún más pesimismo a una economía ya zarandeada. Es cierto que la psicología colectiva (el péndulo entre el optimismo y el pesimismo) influye de forma importante en algunos parámetros económicos, y muy especialmente en el consumo. Pero cuando una sociedad observa cada mañana cómo se pierden puestos de trabajo y conoce un dato tras otro a cual más negativo sobre la situación, negarse a hablar de crisis es como la actitud del niño que se tapa los ojos creyendo que así desaparece el monstruo que hay en la pantalla. Negarse a hablar de crisis no ayuda a que la crisis desaparezca; al contrario: esa actitud mantenida en el tiempo lo que provoca es más desconfianza en quien está obligado a pilotar de forma creíble la situación y mayor incertidumbre sobre el futuro.

Si en la primera legislatura Zapatero provocó la incompreensión o incluso la indignación de muchos ciudadanos del espectro conservador con algunas de sus apuestas políticas (indignación atizada también por determinados medios de comunicación y por el PP), yo diría que en el arranque de la segunda, ese empeño en no reconocer la crisis produjo la primera ruptura entre Zapatero y buena parte de su propio electorado. No sólo por la negativa a

hablar de crisis, sino por el recurso reiterado a lanzar mensajes económicos optimistas que iban siendo desmentidos una y otra vez por la tozuda realidad.

En esa primera parte de la segunda legislatura, mientras desde el Gobierno se cometía ese enorme error de comunicación o de mensaje o incluso de convicción política, hay otra acusación contra Zapatero que surge posteriormente, aunque tiene cierta trampa. Se ha repetido mucho que Zapatero perdió un tiempo precioso cuando negaba la crisis, y que si hubiera reaccionado antes nunca se habría llegado a la situación posterior.

Lo que pasa es que esa crítica tiene un componente claramente ideológico. No es que no se reaccionara y se tomaran medidas, lo que pasa es que esas medidas no gustan a todo el mundo, o bien pueden criticarse a posteriori por sus raquíticos resultados. En la segunda mitad de 2008 y en 2009 se tomaron muchas medidas contracíclicas que pretendían contener los efectos de la crisis; eran medidas de esfuerzo fiscal, keynesianas, en la misma línea que las que se aplicaban en algunos otros países, con la salvedad de que España tenía el menor nivel de endeudamiento público e incluso entre 2005 y 2007 había tenido superávit. Posteriormente se ha dicho que fue un error dedicar por ejemplo 50.000 millones de euros al llamado Plan E de Estímulo de la Economía, pero también hay que decir que se calcula que la caída del PIB en 2009 habría sido de un punto más sin esa inversión. Otra cuestión es si los estímulos deberían haberse hecho en determinados sectores y no en otros o en campos tecnológicos en lugar de en obras públicas, pero lo cierto es que en aquellos momentos tampoco las instituciones europeas e internacionales reprocharon esas políticas socialdemócratas a España. Todavía no se había impuesto el discurso único de la austeridad.

Tras la caída de Lehman Brothers y ante el riesgo de contagio inminente, la reacción de Zapatero fue rápida y contundente en socorro de la banca. El 7 de octubre de 2008 inyectó 50.000 millones de euros a los bancos españoles en una especie de “gran préstamo temporal para prevenir riesgos” y se estableció la garantía de todos los depósitos bancarios hasta 100.000 euros. Una semana

más tarde anunciaba un nuevo fondo de 100.000 millones para “avaluar” a la banca, en una operación coordinada con los demás Gobiernos europeos. Se frenó el primer riesgo de cataclismo financiero regando de dinero público a la banca.

En noviembre de 2009, se aprobó el proyecto más ambicioso o la propuesta estrella de la segunda legislatura de Zapatero: la llamada Ley de Economía Sostenible, una ley ómnibus que pretendía incentivar un modelo económico alternativo al ladrillo, sostenible y capaz de crear empleo de calidad; un modelo basado en eso que todos los Gobiernos consideran el gran reto pendiente de la economía española: aumentar la competitividad. Era una de esas leyes tan complejas, y su tramitación fue tan lenta al no contar con mayoría absoluta, que no se aprobó hasta marzo de 2011, es decir que muchos de sus contenidos estaban ya superados por la crisis cuando se convirtieron en ley.

LA RENDICIÓN O EL RECORTAZO

Como todos sabemos, a principios de 2010 empieza a estallar la llamada “crisis de la deuda” en los países periféricos del euro por la amenaza de insolvencia de Grecia. No es éste el lugar para debatir o analizar la “crisis de la deuda” que aún hoy nos atenaza, pero vaya por delante que a mi juicio tenemos ya datos más que suficientes para considerar que este problema adjudicado a la supuesta frivolidad de España y otros países del sur y a sus permanentes despilfarros está originado fundamentalmente por un diseño fallido del funcionamiento de la zona euro, y por sus desequilibrios internos. No por esa retahíla de tópicos que se resumen en que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y en que tenemos que pagar nuestras culpas por no haber sabido administrarnos. Una cosa es que haya habido mala gestión de los recursos públicos (lo cual es cierto) y hay que exigir todas las responsabilidades que sea menester para que además lo público sea gestionado con criterios de rigor y de eficiencia en todos los ámbitos. Y otra cosa muy distinta es comprar ese ‘discurso único’ de la austeridad que no se sostiene a la luz de los datos de

evolución de deuda y de déficit público y los de balance por cuenta corriente. Cada día, desde hace meses, están sustentando ya esta misma tesis no sólo economistas del ámbito progresista sino expertos de la propia Comisión Europea, del FMI o ayer mismo el magnate George Soros, una de las treinta mayores fortunas del mundo, que pedía a Ángela Merkel que aclarara de una vez por todas si quiere construir Europa o cargarse el euro. La única solución sería a esta crisis de la deuda de los países periféricos pasa por una modificación profunda de las reglas institucionales de la zona euro y de las funciones del BCE.

Lo cierto, en cualquier caso, es que en el invierno de 2010 se produjo la necesidad de rescatar Grecia y de crear un fondo común de 750.000 millones de euros en aquel momento que blindara al euro de los ataques especulativos. Los países del área germana, del núcleo duro, impusieron como condición un programa de ajustes severos en el gasto. Hay que recordar que en la cumbre europea del 9 de mayo de 2010, el llamado “Pearl Harbour” de Zapatero, cuando se dice que Elena Salgado acabó llorando de madrugada por el recortazo que tenían que anunciar de inmediato... hay que recordar que la prima de riesgo de España, el diferencial de interés con Alemania, estaba por debajo de los 200 puntos. Es cierto que el déficit público ya estaba en el 11,2% del PIB, pero se ha aceptado sin discusión prácticamente que el problema de la deuda tiene una correlación directa con el déficit, cosa entonces muy discutible y hoy, como hemos dicho, ampliamente discutida.

El miércoles 12 de mayo Zapatero anunció en el Congreso la reducción media del 5% en los salarios de funcionarios, congelación de pensiones salvo las no contributivas, un recorte de 6.000 millones en inversión pública, la eliminación de la retroactividad en los pagos de la dependencia y la eliminación también del llamado “cheque-bebé”. En total, 15.000 millones de euros de recorte a lo largo de dos años, con el objetivo de bajar el déficit público hasta el 3% en 2014.

No sólo es una cuestión de números, sino que aquel 12 de mayo en el Congreso Zapatero se hizo el hara-quiri respecto a su discurso político. Asumió como propia la tesis de que el principal factor de

inestabilidad de los mercados o de ataques especulativos sobre la deuda era el abultado déficit público español, cuando por esas mismas fechas nadie atacaba a la libra, por ejemplo, pese a que el Reino Unido tenía un déficit similar o incluso superior. Y Zapatero asumió también la prioridad de unas cuentas equilibradas para salir de la crisis, en contradicción absoluta con la política expansiva seguida en los dos años anteriores. Lo único que intentó Zapatero para salvar las durísimas críticas que lógicamente le iban a llover de su propio electorado fue situar una línea roja: “no se tocan las bases del Estado del bienestar”: ni sanidad, ni educación. El matiz de que en pensiones solo era una congelación parcial y temporal o que en dependencia sólo se aplicaba a pagos atrasados no penetró siquiera en el ánimo colectivo, porque todo el mundo lo entendió como un recorte al bienestar en cualquier caso.

Puede argumentarse que Zapatero hizo lo que tenía que hacer para evitar que España acabara como Grecia, que es más o menos el argumento que viene utilizando Mariano Rajoy para justificar a su vez los ajustes que viene aplicando desde que llegó al Gobierno. Pero el descrédito de Zapatero entre su propio electorado vino no tanto por el recorte que decretó como por la parcialidad del mismo. Desde la óptica de un votante de izquierda, no se podía entender que se ajustara en pensiones o en salarios públicos y no se tocara la fiscalidad a grandes empresas o al sector financiero, por no hablar de los privilegios de la Iglesia o la ausencia de una política decidida contra el fraude fiscal. Incluso el ajuste que en Italia aplicó más tarde el tecnócrata Mario Monti, con incidencia no sólo en el gasto sino también en los ingresos, parecía más equilibrado que el de Zapatero. Los sindicatos respondieron convocando huelga general para el 29 de septiembre, con un seguimiento limitado, aunque suficiente para que esa fecha sea considerada como la ruptura de las buenas relaciones entre Gobierno y sindicatos desde la llegada al poder del PSOE en 2004.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Como procede en el recetario neoliberal para la salida de la crisis, los recortes de gasto han de ir acompañados de reformas estructurales. A raíz del giro del 12 de mayo de 2010, Zapatero

anunció tres: las que afectaban al sistema de pensiones, al mercado de trabajo y a la negociación colectiva, además de la del sistema financiero o privatización de las cajas de ahorros.

La reforma del mercado laboral se aprobó en septiembre de 2010 con el rechazo de los sindicatos y de la CEOE. Se supone que pretendía hacer más flexible la contratación sin abaratar el despido. Se aprobó el contrato indefinido con indemnización de 33 días por año trabajado, se ampliaron las causas para el despido procedente con 20 días de indemnización a los casos de empresas con pérdidas “actuales o previstas”, quizás el punto más polémico y criticado de esa reforma. No se consiguió con ella reducir la llamada dualización del mercado de trabajo entre fijos y temporales, considerada una de las causas del alto nivel de desempleo. La demostración del fracaso de esa reforma es que el paro siguió disparándose y un año después se anularon provisionalmente las restricciones al encadenamiento de contratos temporales. Se flexibilizó el sistema de negociación colectiva y se facilitó la declaración de EREs.

Cuando se dice que Zapatero no tomó ninguna decisión para garantizar el futuro de las pensiones desde el punto de vista de quienes consideran insostenible el actual sistema público se falta a la verdad. En julio de 2011 se aprobó una nueva ley que retrasaba la jubilación de los 65 a los 67 años; el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión pasa de 15 a 25 años y el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión máxima pasa de 35 a 38 años y medio. En conjunto, esas medidas suponen que las pensiones se reducirán en torno al 15% de media. Faltaban unos meses para las elecciones generales, y el problema de las pensiones no es coyuntural sino de medio-largo plazo. Es decir, no se trataba de una reforma urgente ni tenía relación directa con el problema del déficit o del tipo de interés de la deuda. Tampoco figuraba esa reforma en el programa electoral. El cálculo de envejecimiento de la población se podía haber hecho igual tres años antes que en ese momento. Esa reforma de las pensiones sólo se explica como un intento más de calmar a los mercados y

generar confianza, cosa que no se logró puesto que la prima de riesgo siguió subiendo.

Por tanto, ni la reforma laboral ni la de las pensiones ni la del sistema financiero sirvieron para frenar el acoso a la deuda. En el verano de 2011, el BCE tuvo que comprar masivamente bonos italianos y españoles. A cambio, y bajo la tutela o batuta de Merkel, el todavía entonces presidente del BCE Jean Claude Trichet envió sendas cartas a los Gobiernos de Italia y España exigiendo nuevas reformas adicionales. El contenido de la carta que recibió Zapatero, fechada el 5 de agosto, se mantuvo en secreto durante meses. Finalmente supimos que en ella el BCE traspasaba sus competencias en materia monetaria para instar al Gobierno a “mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para reducir la altísima tasa de desempleo”. Es decir que el BCE exigía otra reforma laboral a cambio de comprar bonos españoles. La que recibió Berlusconi estaba fechada un día antes, el 4 de agosto, y exigía también cambios en el mercado de trabajo, además de un plan de privatizaciones. La negativa a ejecutar lo que sugería la carta del BCE le costó el cargo a Berlusconi por la vía de la presión desde todas las instituciones europeas. Fue sustituido por el tecnócrata Mario Monti sin pasar por las urnas.

Tras la recepción de esa carta del BCE, Zapatero tomó otra de las decisiones más cuestionadas de toda su etapa de Gobierno. El 23 de agosto de 2011 anunció, sin conocimiento previo de su partido ni de sus propios ministros, una reforma urgente de la Constitución para incluir en ella la prohibición a partir de 2018 del déficit público estructural salvo circunstancias absolutamente excepcionales. Para no aceptar la imposición del BCE sobre una nueva reforma laboral, Zapatero prefirió pactar nada menos que una reforma urgente de la Constitución sin debate público previo de ningún tipo y sin consultarlo con su propio partido. De un plumazo se cargó, de acuerdo con Rajoy y sin buscar siquiera el consenso del resto de los grupos, la tan asentada tesis de que las reformas constitucionales exigen un amplísimo consenso y deben abordarse con exquisito cuidado y mucho tiempo por delante. Pero además de la forma está el contenido: limitar el déficit en la Constitución impide

que los Gobiernos puedan llevar a cabo políticas contracíclicas en tiempos adversos. Si tenemos en cuenta que la política monetaria ya depende de un banco central independiente, la limitación constitucional del déficit supone prácticamente renunciar a una política económica propia. Insisto: lo hizo Zapatero con el apoyo de Rajoy, que ya había hecho esa propuesta anteriormente.

Es cierto que la prima de riesgo, que había superado en agosto los 400 puntos, se relajó sensiblemente, pero obviamente esa relajación se produjo, sobre todo, porque el BCE abrió el grifo de préstamos casi ilimitados a los bancos privados a un interés del 1%, de modo que les salía muy rentable pedir prestado al 1% para comprar deuda pública a intereses a menudo superiores al 5%. No sólo se rebajaba la prima de riesgo, sino que así se facilitaba que los bancos obtuvieran beneficios fáciles para su recapitalización. Esta solución del BCE es absolutamente injusta: resulta que la arquitectura del euro impuesta por Alemania y el BCE no permite ayudar directamente ni a los Estados ni a las empresas ni a los ciudadanos para no aumentar el llamado “riesgo moral”, pero esa máxima se convierte en agua de borrajas para ayudar a entidades financieras que actuaron irresponsablemente.

Sería injusto limitarnos a criticar esas decisiones de Zapatero sin recordar que también obtuvieron algún resultado importante. Mientras en Italia y en Grecia fueron impuestos desde el núcleo duro de la UE Gobiernos tecnócratas sin ser elegidos por los ciudadanos (algo previamente inimaginable en la cuna de la democracia), Zapatero se quemó políticamente a lo bonzo garantizando, eso sí, unas elecciones generales limpias y un traspaso de poderes perfectamente democrático, sin imposiciones ajenas. Nadie puede dejar de reconocer ese indudable mérito. Y durante esos meses finales de mandato también consiguió algo que Rajoy perdió muy pronto. Para frenar los ataques a la deuda española y evitar caer en la situación griega era crucial mantener nuestra prima de riesgo por debajo de la de Italia. Si se repasa la gráfica de ese diferencial con el que ya nos hemos acostumbrado a convivir, Zapatero consiguió que el italiano fuera por delante desde el verano de 2011, tendencia que se rompió al poco tiempo de

llegar el PP al poder y de estrenarse Monti en el Gobierno de Roma.

MÁS ALLÁ DE LA ECONOMÍA

A esas alturas de la Legislatura, la ciudadanía ya no puede examinar nada que no pase por el filtro de la desastrosa situación de la economía y especialmente del empleo. Quien no está en el paro teme llegar a estarlo o mantiene a un familiar que lo está o conoce a una familia en la que nadie encuentra trabajo. Quedan muy difuminados o completamente perdidos otros éxitos políticos que sólo el tiempo podría poner en valor. Con todos sus defectos, obstáculos y errores, lo cierto es que el arriesgadísimo proceso de paz emprendido por Zapatero llevó a la izquierda abertzale a alejarse del terrorismo de ETA. Se quiera reconocer o no, la actitud dialogante del Gobierno puso en evidencia ante la sociedad vasca el inmovilismo de ETA y la dejó aislada entre su propia gente. Ojalá el proceso iniciado bajo su mandato y sobre todo el anuncio del fin definitivo de la violencia no tenga vuelta atrás. Es cierto que ese mérito es de todos y nadie debe apropiárselo, pero también es una actitud muy cicatera no reconocer que Zapatero sufrió un tremendo desgaste político para contribuir al objetivo de la paz.

Corresponde también a esta IX Legislatura una nueva ley de financiación autonómica que elevó la participación en los impuestos estatales y el fondo a repartir, pero que tampoco sirvió para satisfacer las múltiples reivindicaciones. Se endureció la Ley Anti-tabaco con la prohibición de fumar en cualquier local de uso público y se dio otra vuelta de tuerca al Código Penal, que agravó las penas por terrorismo, pederastia y corrupción.

En política exterior, si la primera Legislatura estuvo marcada por el cumplimiento de la retirada de tropas de Irak y fue identificada con la apuesta por la Alianza de Civilizaciones con la que hacía chistes la derecha mediática pero a la que también ha abrazado Mariano Rajoy, en la segunda se marcaron como prioridades las relaciones con África y Asia, la gestión ordenada de la migración y la promoción de la paz frente a la inseguridad y el terrorismo. Se

mantuvo el compromiso de lograr que el 0,7% del PIB sea destinado al desarrollo sostenible.

En 2010 España presidió durante el primer semestre la Unión Europea, por cuarta vez en su historia. A mi juicio fue otra baza mal utilizada por el presidente Zapatero. Es cierto que coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo cual convertía en presidente del Consejo Europeo al belga Van Rompuy, pero está claro que España no utilizó ese semestre su capacidad de presión y de iniciativa ante el resto de la UE para al menos haber puesto en entredicho las políticas que pactaban con descaro Merkel y Sarkozy y que perjudicaban a toda la periferia. Como mínimo, Zapatero tuvo la oportunidad de situar los focos de la maquinaria europea en una dirección que no fuera exclusivamente la del discurso franco-alemán.

No se le puede negar a Zapatero tampoco su capacidad para romper moldes establecidos o abrir nuevos caminos en formas y fondo de la política. El nombramiento de Carmen Chacón, primera mujer al frente de un ministerio de Defensa, embarazada de siete meses, fue elogiado por la prensa y los políticos de todo occidente, a excepción de Berlusconi, que no puedo evitar el toque machista y retrógrado característico.

Otras decisiones políticas de calado, la mayoría originadas en la primera legislatura, quedaron ensombrecidas en la segunda por la crisis económica, pero no deberían perder el valor que tuvieron a la hora de situar a España en un lugar destacado en materia de avances democráticos y de derechos sociales: el matrimonio homosexual, la ley de igualdad, la ley sobre violencia de género, la ley de plazos del aborto o la Ley de Dependencia son algunos ejemplos. Sin embargo, no se avanzó apenas en materia de laicidad ni se aprobó tampoco la prometida Ley de Transparencia. Es cierto que nunca contó con una mayoría absoluta que facilitara la posibilidad de cumplir todos los compromisos electorales adquiridos.

Si hay una faceta en la que Zapatero se ha distinguido, quizás junto a Adolfo Suárez, es en el respeto a la libertad de información.

Su relación con los medios fue absolutamente exquisita. El proyecto sobre la radiotelevisión pública, que eliminaba la posibilidad de control político partidista, no contentó a propios ni a extraños, pero dio lugar a una etapa de independencia profesional difícilmente discutible.

EL FACTOR PSOE

A ese final ácido y frustrante de la segunda Legislatura de Zapatero, especialmente en sus propias filas, no ayudó tampoco la evolución interna en el PSOE. Si es que alguna vez pensó en repetir candidatura, el caso es que el 2 de abril de 2011 anunció su decisión de no volver a presentarse, convencido de que de ese modo el castigo de los votantes podría personalizarse más en él mismo que en el PSOE. No pocos analistas han visto en ese gesto un posible intento de seguir la estela de Adolfo Suárez, absolutamente denostado en su última etapa de Gobierno y recolocado en el pedestal de la historia pasados los años. Que Zapatero aspirara o todavía aspire a eso es algo que sólo conoce él mismo, pero tendría lógica desde el punto de vista humano y psicológico.

Una vez auto-eliminado de la carrera, se daba por hecho que habría dos competidores para elegir en primarias internas al candidato socialista: Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón. Pero un sector encabezado por Patxi López se opuso a la celebración de primarias y plantea un congreso extraordinario que relevara de inmediato a Zapatero al frente del partido y no sólo de la candidatura a la Moncloa. Esta operación sólo podía interpretarse como una presión para que Chacón se retirara de la carrera y Rubalcaba fuera aclamado, como así ocurrió. Al margen de la contradicción evidente entre la supuesta pretensión de renovar profundamente un partido y situar al frente a quien lleva treinta años en su dirección (más allá de la indiscutible talla política de Rubalcaba), lo cierto es que aquella estratagema desautorizó al propio Zapatero como referencia por no haber impuesto el cumplimiento de las reglas de juego, pero sobre todo hizo trizas la

credibilidad de la democracia interna del PSOE y la confianza en sus sistema de primarias.

La suma de todos los factores, internos y externos, dio como resultado electoral el peor para el PSOE en toda la historia democrática.

Al hilo de la explosión de la crisis y del aumento del paro, pero también con causas mucho más profundas que tienen que ver con la globalización, la revolución digital, el agotamiento del modelo de la transición... en la última parte de la legislatura fue surgiendo el magma que dio lugar al movimiento del 15-M y de los Indignados. Se extendió la irritación general ante la percepción de que quienes fueron los principales causantes de la megacrisis (financieros, consejeros de grandes corporaciones, grandes empresarios...) no eran los más perjudicados por la misma. Más bien al contrario. La convicción de que el capitalismo financiero de los últimos 20 años ha dado lugar a unas relaciones digamos incestuosas con el poder político ha provocado un alejamiento radical de una parte importante de la ciudadanía respecto a ese poder político, al que considera cómplice cuando no súbdito de ese poder financiero. Mientras la economía crecía más que en ningún otro lugar de Europa, esos privilegios pasaban inadvertidos o se hacía la vista gorda, pero en cuanto empezó la etapa de los grandes sacrificios y del empobrecimiento galopante de las clases medias se hizo más evidente la injusticia de esa desigualdad.

El Movimiento de los Indignados y de sus múltiples derivados (el más actual sin duda el de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas) obliga a replantear muchas cosas en el sistema si se pretende poner freno al debilitamiento de la democracia. Contemplarlo o pretender visualizarlo como un problema sobre todo de orden público es un error que sólo puede traer peores consecuencias.

Así es como termina la novena Legislatura, nada menos que con la puesta en solfa de una arquitectura institucional que necesita nuevos modos, lenguajes, mensajes y compromisos.

Zapatero renunció a parte de sus ideales creyendo que hacía lo mejor para España al someterse a las imposiciones de Bruselas, Frankfurt y Berlín: “cueste lo que me cueste”, dijo. Y no supo, no pudo o no quiso utilizar el margen que tenía para al menos elegir una forma más justa de repartir los sacrificios impuestos. Eso es lo que, a mi modesto entender, ensombrece una Legislatura en la que se evitó un posible cataclismo financiero, pero también se aceptó un camino que está desmontando los mejores logros de décadas de progreso social en Europa y en España.

Por terminar con una mínima sonrisa. No hay Gobierno de ningún signo que no presuma de los éxitos deportivos de su etapa. A la novena Legislatura hay que apuntarle 18 medallas olímpicas en Pekín, una Eurocopa de fútbol y un Mundial. Para que conste.